



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG
ISSN 2735-7589
N° 44
ENERO 2026

Contenido

TEMA DEL MES: EL PRIMER GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST: DISEÑO, LÓGICA Y DESAFÍOS	3
CHILE BAJO LA LUPA: CLIMA DE OPTIMISMO Y ALTAS EXPECTATIVAS FRENTE AL NUEVO GOBIERNO	6
ALERTA CONCEPTUAL: TRASPASO PRESIDENCIAL.....	8

TEMA DEL MES

EL PRIMER GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST: DISEÑO, LÓGICA Y DESAFÍOS

El primer gabinete anunciado por José Antonio Kast responde a una lógica política clara y coherente con el diagnóstico que el propio Presidente electo ha venido sosteniendo desde la campaña: Chile enfrenta una situación de emergencia en materias clave como seguridad, orden público y estancamiento económico, lo que exige un tipo de Gobierno distinto al de períodos de normalidad institucional. Bajo esa premisa, la conformación del elenco ministerial privilegia tres criterios centrales: cercanía personal con el Presidente, adecuación funcional al desafío de conducir un Gobierno de emergencia y recrear el arco de fuerzas políticas que dieron sustento a la opción Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

En este diseño, la confianza aparece como un activo político central. A diferencia de gabinetes estructurados principalmente sobre la base de equilibrios partidarios o cuotas formales entre coaliciones, en este caso, la mediación entre los ministros no está dada prioritariamente por su adscripción política, sino por el vínculo directo y la estrechez con el Primer Mandatario.

Con todo, es preciso distinguir un Comité Político integrado por figuras con amplia trayectoria, experiencia y ascendiente político, llamadas a cumplir un rol de conducción estratégica y contención política del Gobierno, del resto del gabinete, integrado mayoritariamente por ministros sectoriales que poseen un perfil más técnico o de gestión, alineados con la lógica de ejecución rápida y focalizada en una era donde el *delivery* es todo.

Desde un punto de vista conceptual, el gabinete exhibe una división relativamente nítida entre carteras de sello político, económico y social. Esta segmentación busca ordenar prioridades y concentrar esfuerzos en función de los principales problemas que el Gobierno entrante identifica como urgentes.

Sin embargo, el diseño global también abre interrogantes relevantes respecto de la articulación y proyección política de esta administración, especialmente considerando que Nacional Libertarios optó por no integrar formalmente el oficialismo y ejercer un rol de colaboración puntual, caso a caso, desde el Congreso. La ausencia de esta colectividad desde esta fase embrionaria del Gobierno plantea algunas dudas sobre el sostén político estructural del Gobierno, los futuros grados de apoyo y la capacidad de construir mayorías estables en un Parlamento fragmentado.

Por otro lado, el estilo de esta fase inicial del Gobierno guarda una estrecha similitud con la forma en que José Antonio Kast condujo su campaña presidencial: un círculo estrecho de confianza y un flujo de toma de decisiones centralizada. Este hermetismo puede ser funcional para transmitir orden y control en la fase de instalación del Gobierno, pero también supone riesgos en términos de ampliación política, integración de apoyos y manejo de expectativas dentro del propio mundo de adherentes que respalda al Presidente.

Un elemento aún pendiente, y que será decisivo para evaluar el equilibrio final del diseño gubernamental, es la nominación de los subsecretarios. Esta definición no solo tendrá impacto en los equilibrios partidarios, sino también en la dinámica cotidiana de la gestión pública. La adecuada complementariedad entre ministros y subsecretarios será clave para evitar duplicidades, silos administrativos o tensiones entre enfoques excesivamente técnicos o excesivamente políticos,

cualquiera de los cuales podría afectar la eficacia del Gobierno en un contexto que exige resultados rápidos.

Finalmente, otro desafío relevante dice relación con la proyección territorial de este diseño ministerial. La coherencia entre la visión central del Gobierno y su expresión regional —a través de delegados presidenciales y seremías— será fundamental para que el enfoque de emergencia no se limite a un discurso desde La Moneda, sino que se traduzca efectivamente en acción estatal con anclaje en la realidad diversa de nuestra división política y administrativa regional.

La división oficialista: el fin de un pacto por conveniencia

En política, el poder tiende a cohesionar, mientras que su pérdida o debilitamiento suele acelerar procesos de fragmentación. Lo que se observa hoy en el oficialismo no es una simple polémica coyuntural ni una controversia aislada, sino el inicio del desorden característico propio del final de un ciclo de Gobierno. La convivencia entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático fue posible mientras existió un proyecto común sostenido por el control del Ejecutivo, pero en el ocaso de la administración de Gobierno, ese factor aglutinador deja de existir.

La absolución del ex teniente Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica ha operado como un catalizador de tensiones preexistentes e importa un clivaje más profundo que cruza a la sociedad entera e incluso al propio oficialismo: octubrismo versus anti-octubrismo. Esa discusión, que hoy orbita en círculos politológicos y académicos, se ha transformado en una disputa política concreta, con consecuencias directas sobre la estabilidad interna del Gobierno, su relación con la institucionalidad y el futuro del progresismo.

En este contexto, la reacción de sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista frente al veredicto judicial ha estado marcada por la ya característica poca prudencia e impulsividad de esta cultura política. Se ha instalado la idea de que la Ley Naín-Retamal habría sido determinante en la absolución de Crespo, así como la tesis de que el Socialismo Democrático sería políticamente responsable de un fallo “injusto” que genera impunidad. Ambas afirmaciones resultan problemáticas, toda vez que se trató de un juicio largo, con una investigación exhaustiva y un fallo unánime, en el que el tribunal concluyó que existió legítima defensa por parte del ex teniente Crespo, frente a un contexto de violencia radical donde existió una amenaza con potencial letal.

Además, resulta particularmente contradictorio que una ley presentada como parte del legado del propio Presidente Boric sea hoy utilizada como objeto de reproche político interno. Si la norma era considerada tan negativa o peligrosa, la pregunta es inevitable: ¿por qué no fue vetada? ¿Por qué fue incluida en el amplio catálogo de medidas constitutivas del legado de esta administración? Este tipo de inconsistencias debilita la credibilidad del discurso oficialista y expone una falta de coherencia estratégica en la conducción política del Gobierno.

Por otro lado, las declaraciones del Presidente Boric, explicitando su pesar por el veredicto, aproximándose a la controversia “desde el corazón”, pueden ser comprensibles desde una dimensión humana, pero no parecen estar a la altura de quien dirige la primera magistratura del país. No parece prudente que un Presidente comente fallos judiciales ni tampoco que los pondere exclusivamente desde la conmoción. Gobernar exige que las emociones sean moderadas por la razón, especialmente cuando se trata de decisiones de un poder judicial autónomo. Aunque parezca improcedente para un sector del progresismo, defender la justicia es contradictorio con relativizar la institucionalidad al tensionar el principio de separación de poderes.

Cuando un Gobierno pierde ese equilibrio, pierde autoridad. Y cuando la autoridad se debilita, las divisiones internas dejan de ser administrables y pasan a ser visibles, estridentes y políticamente costosas; ese es el escenario actual en el que se encuentra el oficialismo.

Con todo, lo que hoy ocurre en el oficialismo es, en última instancia, la expresión de un fin de ciclo: la disolución de la cohesión que sostuvo el poder y la reaparición de diferencias estructurales que ya no encuentran un eje político capaz de ordenarlas.

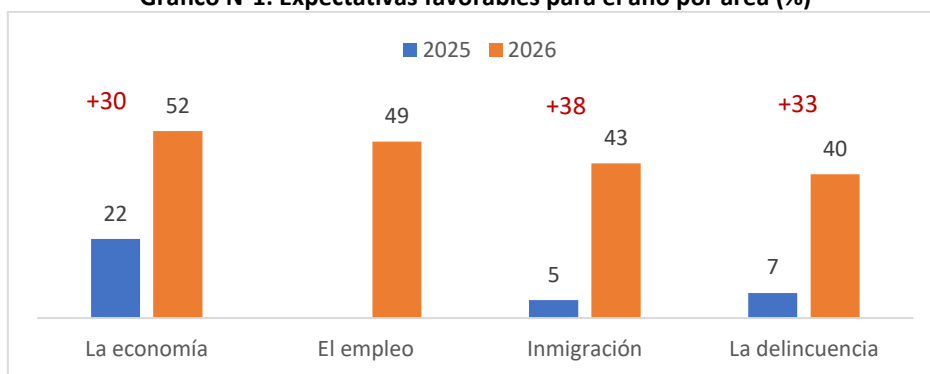
CHILE BAJO LA LUPA

CLIMA DE OPTIMISMO Y ALTAS EXPECTATIVAS FRENTE AL NUEVO GOBIERNO

A poco menos de dos meses que asuma el nuevo Gobierno, no solo reina un ambiente de mayor optimismo en la ciudadanía, sino también expectativas que se alinean favorablemente con la agenda del Presidente electo.

La encuesta Cadem de la segunda semana de enero señala que un 66% de los chilenos se siente optimista respecto del futuro del país, mientras que un 61% indica que a Chile le irá bien o muy bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast, una cifra que muestra tendencias al alza en tanto se ubica 6 pp. por encima de lo registrado a mediados de diciembre (55%). En esta misma línea, la encuesta Cadem de la primera semana de enero da cuenta que un 52% de la ciudadanía considera que las expectativas para la economía serán mejores este 2026, un 49% piensa lo mismo del empleo, un 43% lo mismo de la inmigración y un 40% lo mismo respecto de la delincuencia. Cifras que se ubican muy por encima de las expectativas que existían a comienzos del año 2025 (ver Gráfico N°1).

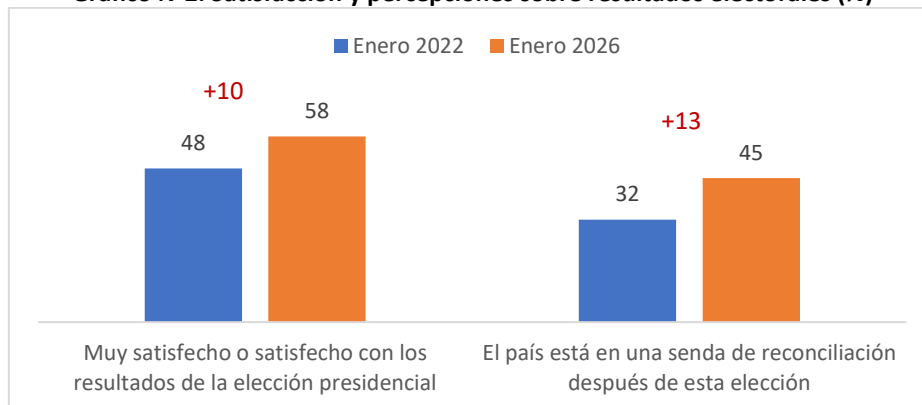
Gráfico N°1: Expectativas favorables para el año por área (%)



Fuente: Encuesta Plaza Pública Cadem, 9 de enero de 2026.

En contraste con el ánimo que existía hace cuatro años atrás, cuando era Gabriel Boric quien se alistaba para asumir el poder, la encuesta Critería de enero nos muestra que hoy existe una mayor satisfacción con los resultados de la elección presidencial: un 58% se encuentra satisfecho o muy satisfecho (ver Gráfico N°2). Asimismo, existe una mayor percepción de que, producto del resultado en las urnas, el país está en una senda de reconciliación (45%).

Gráfico N°2: Satisfacción y percepciones sobre resultados electorales (%)

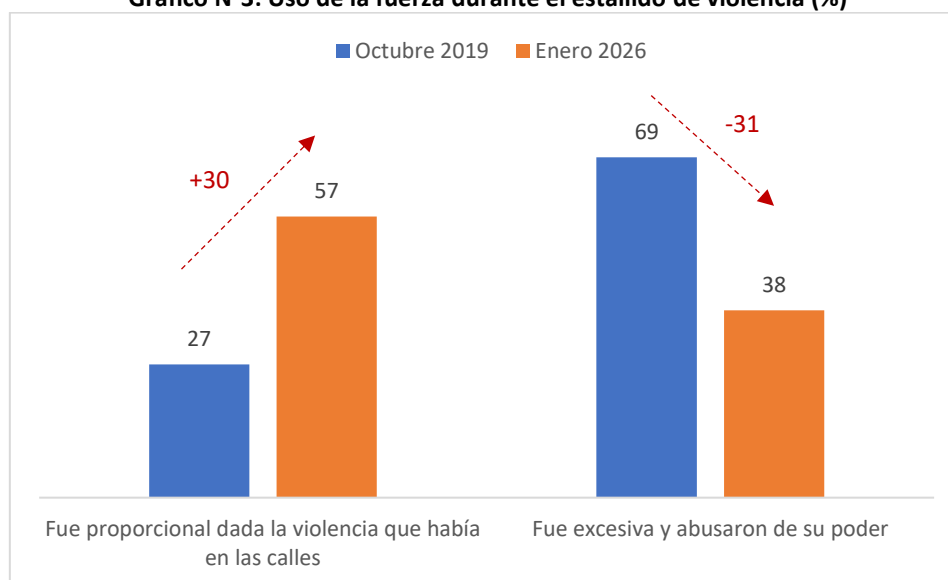


Fuente: Encuesta Critería, 11 de enero de 2026.

Por su parte, los resultados de la encuesta Panel Ciudadano UDD del 13 de enero indican que un mayoritario 57% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el actual Gobierno entregará un país “más estable, con una mejor situación económica y social que la recibida”, porcentaje que aumenta al 65% al considerarse solo a los votantes obligados (los 5 millones de electores que comenzaron a votar una vez que se adoptó el sistema de inscripción automática y voto obligatorio). Por su parte, el estudio señalado da cuenta también que un 61% de los chilenos considera que el país necesita un Gobierno de emergencia, lo que aumenta a un 74% en el caso de los votantes obligados.

Este ánimo favorable para el Gobierno entrante se traduce también en una visión distinta sobre la contingencia, mucho más alineada con sus principios. En este sentido, de acuerdo a la encuesta Panel Ciudadano UDD del 15 de enero, un 55% de la población está de acuerdo con la absolucón del ex carabinero Claudio Crespo. Asimismo, según datos de la encuesta Cadem de la segunda semana de enero, un mayoritario 70% está de acuerdo con la ley Nain-Retamal y un 57% considera que el uso de la fuerza de Carabineros y el Ejército en el estallido de violencia fue proporcional dada la violencia que había en las calles, lo cual contrasta enormemente con lo registrado durante el mes de octubre del 2019, en donde un 69% creía que esta fuerza fue excesiva y abusaron de su poder (ver Gráfico N°3).

Gráfico N°3: Uso de la fuerza durante el estallido de violencia (%)



Fuente: Encuesta Plaza Pública Cadem, 16 de enero de 2026.

Las tres dimensiones antes analizadas (expectativas, percepciones y valoración del uso de la fuerza) ilustran un escenario altamente favorable para el nuevo Gobierno, al cual se le abre la gran oportunidad de poder abordar los desafíos que fueron relevantes para la ciudadanía en los últimos años: seguridad, migración y reactivación económica.

ALERTA CONCEPTUAL TRASPASO PRESIDENCIAL

En Chile, el traspaso presidencial no es una ceremonia de “cambio de banda” de un día. Es un período extenso, de varias semanas, que configura un calendario político particular desde el veredicto de las urnas hasta el inicio de la nueva administración el 11 de marzo. En esa franja, que suele superar los 80 días, se juega un partido silencioso entre lo que se va y lo que llega, quién controla la información crítica del Estado, quién fija las prioridades inmediatas y, en la práctica, quién condiciona la agenda con la que parte el nuevo Gobierno.

En la discusión política chilena, el “traspaso” suele operar como un insumo adicional para prolongar las rencillas del cierre de ciclo. Desde el Ejecutivo, se presenta como una obligación de resguardar y poner en valor lo realizado, enfatizando la idea de continuidad de “avances” alcanzados. Un ejemplo claro es la cuestionada campaña de los “1.000 avances”, plataforma que busca sistematizar y difundir las acciones impulsadas durante los últimos cuatro años, y que ha sido ampliamente promovida en las últimas semanas¹. Desde la oposición, en cambio, el traspaso es el momento de transparentar la gestión del Gobierno saliente, “abrir la caja fiscal”, denunciar decisiones de última hora y prevenir candados administrativos o eventuales leyes de amarre.

Conceptualmente, el traspaso consiste en la transferencia efectiva de autoridad, información y capacidad estatal. La ciencia política lo aborda como un problema clásico de coordinación y asimetría de información. El Gobierno saliente todavía gobierna y concentra datos y conocimiento operativo imprescindibles, pero el entrante será responsabilizado tempranamente por los resultados. Al mismo tiempo, una ciudadanía cada vez más impaciente no concede un “período de aprendizaje” y exige respuestas desde el primer día, incluso cuando el nuevo Gobierno aún no controla plenamente la maquinaria estatal.

La literatura ha mostrado que las transiciones más exitosas son aquellas que preparan la instalación con anticipación: levantan un mapa de decisiones críticas, identifican cuellos de botella, ordenan flujos de información y estructuran la coordinación interministerial necesaria para ejecutar el programa, reduciendo la improvisación y los errores típicos de los primeros días². En esa misma línea, varios autores subrayan un punto especialmente sensible: cuando no existe cooperación mínima ni reglas claras de intercambio, el nuevo Gobierno asume con poder formal, pero sin control operativo³.

A ello se suma el dilema de los nombramientos. El recambio de autoridades y equipos puede fortalecer el control político y alinear prioridades, pero también puede degradar el rendimiento si se pierde memoria institucional, se interrumpen procesos críticos o se politizan en exceso funciones que requieren continuidad técnica⁴.

En definitiva, el traspaso de Gobierno debe entenderse menos como un cierre simbólico y más como una prueba decisiva de continuidad estatal y madurez institucional. Cuando el *interregno* se reduce a una pugna por el relato del legado se sacrifica lo esencial, que la nueva administración asuma con información y capacidad operativa desde el primer día. Un traspaso bien gestionado no elimina las diferencias políticas, pero sí acota sus costos administrativos y evita que la instalación quede atrapada en improvisaciones. En un contexto de altas expectativas ciudadanas, la calidad del traspaso no se

¹ <https://www.gob.cl/1000avances/categorias/>

² Pfiffner (2011). Presidential transitions

³ Burke (2000). Presidential Transitions: From Politics to Practice

⁴ Lewis (2008). The Politics of Presidential Appointments: Political Control and Bureaucratic Performance

mide por quién gana la última polémica, sino por cuánta incertidumbre se logra reducir y cuánta gobernabilidad se asegura para el ciclo que comienza.

Ante el anuncio del nuevo equipo ministerial del Presidente electo, se espera que esta etapa se inicie formalmente. Instrumentos como directivas presidenciales o plataformas que faciliten el traspaso de información administrativa contribuyen a reducir fricciones y polémicas entre ambas administraciones.